INFORME SECRETARIAL.

Bogotá D.C. 19 de marzo de 2020.

En la fecha, pasa al despacho del Juez, Acción de tutela radicada con el número **2020 00112**. Sírvase proveer.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C.

ACCIÓN DE TUTELA NO. 110013105033 2020 00112 00			
ACCIONANTE	Andrés Felipe Sánchez Marín	**DOC. IDENT.**	1006408823
ACCIONADA	Instituto Colombiano De Crédito Educativo Y Estudios Técnicos En El Exterior- ICETEX		
PRETENSIÓN	ORDENAR a la accionada ICETEX, **ingresar al menor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ MARÍN en el programa "Generación E", en el proceso 2020-1, o en su defecto en el proceso 2020-2.**		

Bogotá D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020).

A N T E C E D E N T E S

ROSSMARY MARÍN DÍAZ, actuando como agente oficiosa de su menor hijo ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ MARÍN, presentó solicitud de tutela contra el **INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX**, invocando la protección de los derechos fundamentales de su hijo al **DEBIDO PROCESO** y la **EDUCACIÓN**, los cuales considera vulnerados por cuanto la **accionada no ha ingresado al menor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ MARÍN en el programa "Generación E", en el proceso 2020-1, o en su defecto en el proceso 2020-2 pese a cumplir los requisitos exigidos.**

Para fundamentar su solicitud, la accionante relata los siguientes:

I. HECHOS.

1. Que ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ MARÍN se graduó del colegio Liceo Tame del municipio de Arauca, obteniendo el primer puesto por su excelencia académica.

2. Que con la prueba SABER 11 – ICFES, obtuvo a nivel municipal el tercer mejor puntaje entre colegios públicos y privados.

3. Que el 22 de octubre de 2019 fue admitido en la Universidad Externado de Colombia.

Yg

4. Que el 18 de noviembre de 2019 ANDRÉS FELIPE realizó la inscripción 5307789.

5. Que el 10 de diciembre de 2019, a las 3:40 pm aproximadamente, ANDRÉS FELIPE, por medio de la plataforma del ICETEX arrojó como resultado NO APROBADO.

6. Que en razón a lo anterior se radicó una acción de tutela donde ordenaban un cumplimiento a la entidad accionada por presuntas irregularidades en el proceso.

7. Que el 17 de enero de 2020 su hijo inició sus estudios en la referida universidad, dando cumplimiento a la medida provisional por parte de la universidad.

8. Que su menor hijo tiene derecho al beneficio "Generación E" que otorga el ICETEX.

9. Que desde el 11 de febrero de 2020 han tratado de obtener comunicación e información para acceder al beneficio mediante llamadas telefónicas, chats virtuales, consultas presenciales ante el ICETEX.

10. Que la información proporcionada sólo ha causado dilatación e impedimentos para ingresar al programa.

11. Que el 12 de febrero del año en curso se le informó a su hijo que debía diligenciar un formulario que se encontraba en la página de la universidad.

12. Que cuando estaba diligenciando el formulario recibió un bloqueo y no logró terminar de diligenciarlo.

13. Que el 19 de febrero de 2020 ANDRÉS FELIPE recibió un correo de la Universidad citándolo a entrevista con psicología en Bienestar Universitario, como parte del proceso.

14. Que el 28 de febrero de 2020 ANDRÉS FELIPE volvió a acercarse a la oficina del ICETEX que queda en la Universidad Externado de Colombia y le informan que debe ir a la principal en donde le dicen que debe diligenciar el formulario que aparece en su página web, el cual igualmente le genera problemas.

15. Que con ocasión de tal situación el menor llamó al ICETEX y le informaron que haber presentado solicitud al FONDO POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA con anterioridad, impedía el envío del formulario al programa "GENERACIÓN E", y que por lo tanto debe presentar una carta solicitando que la solicitud al Fondo Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia fuera borrada, a lo cual procedió el menor y obtuvo como respuesta que la entidad contaba con 15 días para resolver la solicitud.

16. Que, con ocasión de ello, el menor redactó una petición que intentó hacer llegar a la entidad mediante el chat virtual, pero allí le informaron que dicha petición debía ser radicada de manera presencial en una de las oficinas de la entidad.

17. Que el menor preguntó en el chat que hasta cuándo tenía plazo para enviar el formulario para continuar con el proceso de "Generación E", y le informaron que hasta el 30 de marzo de 2020 porque las fechas se habían ampliado.

18. Que el 2 de marzo de 2020 el menor se acercó a la oficina del ICETEX ubicada en la Calle 57 No. 8-69 local 46-48 y 50 y allí radicó la petición mencionada.

19. Que nuevamente preguntó cuál era el plazo para enviar el formulario y le respondieron que dicho plazo ya se encontraba agotado.

II. INTERVENCION DE LA ACCIONADA.

Admitida la tutela (**folio 47**), de ella se dio traslado a la entidad accionada a fin de que ejerciera el derecho de defensa, solicitándole informara sobre las pretensiones del accionante, no obstante, guardó silencio, razón por la cual se dará aplicación al contenido del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 que contempla:

> ***"ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD.*** *Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa."*

III. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde al Despacho determinar si existe violación a los derechos fundamentales al **DEBIDO PROCESO** y la **EDUCACIÓN,** tal como lo plantea la accionante.

Así mismo, es del caso establecer si es la Acción de Tutela el mecanismo idóneo para resolver la solicitud de ROSSMARY MARÍN DÍAZ.

Con lo anterior se procede a resolver previas las siguientes;

C O N S I D E R A C I O N E S

Conforme al art. 86 de la Constitución Política y el Decreto reglamentario de la acción de tutela (art. 1º. del mencionado Decreto), ésta procede contra la acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares, sobre estos últimos, según lo establece la ley (art. 42 del mismo Decreto) que vulneren o amenacen cualquiera de los derechos constitucionales fundamentales y que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Establece por previsión supra legal la concepción de la acción de tutela, un instrumento jurídico que permite brindar a cualquier persona, sin mayores requisitos de orden formal, la protección específica e inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando se ven vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que le señale la ley, siempre que para la protección del derecho que busca el amparo de tutela no exista otro mecanismo de defensa judicial para protegerlo, o existiendo, al ejercitarse la acción se pretenda evitar un perjuicio irremediable, para lo cual su procedencia sería posible como mecanismo transitorio dada su inmediatez para la protección del derecho constitucional violado.

Además, el Decreto 306 de 1.992, por medio del cual se reglamenta el 2591 referido, establece en su artículo 2º que la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales y que no puede ser

utilizada para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquier otra norma de categoría inferior, como así lo tiene interpretado y definido la jurisprudencia reiterada de nuestro máximo Tribunal (Corte Constitucional) de la jurisdicción de tutela.

El juez de tutela está instituido para la guarda de los derechos fundamentales, por esa razón se ha reiterado que incluso no es necesario que en forma particular se indique la vulneración de algún precepto, considerando que si al efectuar el análisis de la controversia que le es planteada, encuentra quebrantado alguno de los principios de orden constitucional, deberá adoptar las medidas tendientes a garantizar la guarda del derecho que encuentre conculcado, si la situación fáctica como las pruebas que sustentan la acción dan cuenta de ello, o incluso si la acción de tutela está dirigida a obtener el amparo de otro derecho que no es el que se afirma vulnerado.

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Menciona la jurisprudencia de la Corte Constitucional que al analizar el requisito de inmediatez de la acción de tutela por la inminencia de un perjuicio irremediable tal componente debe ponderarse bajo el criterio del plazo razonable y oportuno, tal como lo expresa entre otras en la sentencia T 245 de 2015 en los siguientes términos:

> *"La inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución. La satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto. Esa razonabilidad se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental. (…)*
>
> *La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que:*
>
> *i) Exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros;*
>
> *ii) La inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;*
>
> ***iii) Exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o***
>
> ***iv) Cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos continúa y es actual."***

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Como bien es sabido, la acción de tutela fue creada como un mecanismo cuya finalidad es garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas que están siendo vulnerados o amenazados. Dicha acción tiene un carácter residual, en tanto que la misma procede únicamente ante la inexistencia

o ineficacia de otros mecanismos judiciales que contrarresten la inminente vulneración de los derechos fundamentales de las personas. (Sentencia T-132 de 2006).

Bajo este postulado, el inciso 4ª del Art. 86 de la C.P. establece que ***"esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". (Subrayado fuera de texto).***

A su vez, Art. 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que dicha acción será improcedente cuando existan otros medios de defensa judiciales como arriba se mencionó, no obstante, esta acción será procedente excepcionalmente, siempre y cuando dichos medios no resulten eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. Para tal efecto, el Juez constitucional deberá analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar la eficacia de los medios de defensa judicial existentes y las circunstancias específicas en que se encuentra el accionante para invocar la protección de sus derechos a través de la tutela.

En tal sentido, la acción de tutela procede como mecanismo principal y definitivo de protección de los derechos fundamentales cuando el accionante ha acreditado que no cuenta con otros medios de defensa judicial, o que, existiendo, estos no resultan idóneos para resguardar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados *(Sentencia T-079 de 2016).* De presentarse dicho evento, el Juez Constitucional deberá evaluar las circunstancias específicas en las que se encuentra el accionante, para determinar si en el caso en concreto los medios existentes resultan ineficaces para la protección de sus derechos.

Por su parte, esta acción constitucional procede como mecanismo transitorio en aquellos casos en los que, pese a existir otros medios de defensa alternativos, el accionante busca evitar la consumación de un perjuicio irremediable, caso en el cual la orden de tutela tendrá efectos temporales y producirá efectos hasta tanto la autoridad competente decida de fondo el respectivo caso.

De tal manera, se tiene entonces que existen dos excepciones al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela *(Sentencia T-029 de 2017)*, una de las cuales se encuentra estrechamente ligada con la existencia de un perjuicio irremediable. Así pues, en cuanto a la naturaleza de este perjuicio y cómo identificar la existencia del mismo en un determinado caso, la Corte Constitucional ha establecido las características propias de esta figura de la siguiente manera:

> *"(i) inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir, (ii) grave, por dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado relevante, (iii) que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad". (Sentencia T- 538 de 2013.)*

Para tales efectos, la Corte dispone que el Juez Constitucional debe realizar un juicio de procedibilidad de la acción, el cual deberá ser menos estricto cuando el accionante sea un sujeto de especial protección. De tal manera lo ha dispuesto al establecer que "existen situaciones especiales en las que el análisis de procedencia de la acción debe desatarse de manera más amplia y permisiva, en atención a la especial naturaleza de las personas que solicitan la protección de sus derechos constitucionales fundamentales" *(Sentencia T-515 de 2006)* (Subrayado Fuera de Texto).

Así pues, al momento de realizarse el juicio de procedibilidad, se deberán analizar las condiciones específicas del accionante como sujeto de especial protección, con miras a flexibilizar las reglas generales de procedibilidad de la acción de tutela contempladas en el Decreto 2591 de 1991. *(Sentencia T-206 de 2013)*

> *"Esta Corte ha manifestado que* ***si bien los jueces de tutela deben ser estrictos en la aplicación de estos requisitos, para efectos de hacer valer el carácter subsidiario de la acción de tutela, existen situaciones en las que el análisis de procedibilidad de la tutela se debe efectuar en forma más amplia -esto es, menos estricta-, dada la naturaleza de las personas que solicitan amparo para sus derechos fundamentales: se trata de los casos en que estén de por medio los derechos de cualquiera de los sujetos de especial protección constitucional, tales como niños, mujeres cabeza de familia, ancianos, miembros de minorías o personas en condiciones de extrema pobreza****. En tales situaciones, los jueces deben estudiar las características del perjuicio irremediable arriba explicadas con un criterio de admisibilidad más amplio, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad." (Sentencia T-015 de 2006) (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Para realizar dicho análisis, el Juez de Tutela tendrá que tener en cuenta que este mecanismo se encuentra revestido de un carácter residual y subsidiario, para garantizar una protección inmediata de los derechos fundamentales cuando no exista otro medio de defensa eficaz para salvaguardar el derecho, o cuando esta se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. *(Sentencia T-336 de 2009)*

De tal forma se tiene la acción de tutela procede de manera excepcional en los siguientes casos *(Sentencia T-336 de 2009)*:

> *"i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no sean lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados o amenazados.*
>
> *ii) Cuando a pesar de que tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.*
>
> *iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas) y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela"10. (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

De otro lado, la sentencia T 426 de 2018 menciona algunos requisitos adicionales que debe analizar el juez constitucional a resolver solicitudes relacionadas con asuntos pensionales:

> *"Algunos supuesto indicativos de la procedencia excepcional del mecanismo de amparo constitucional son:*
>
> *a) El estado de salud del solicitante;*
> ***b) El tiempo que la autoridad pensional demoro en desatar el procedimiento administrativo;***
> ***c) La edad del peticionario;***
> *d) La composición del núcleo familiar del mismo, por ejemplo, el número de personas a cargo, o si ostenta la calidad de cabeza de familia; (v) el potencial conocimiento de la titularidad de los derechos, al igual que las acciones para hacerlos valer; y*

e) Las circunstancias económicas del interesado, análisis que incluye el promedio de ingresos frente a los gastos, el estrato socioeconómico y la calidad de desempleo"

De otro lado, y teniendo en cuenta que lo pretendido por la actora alude a circunstancias que han generado consecuencias negativas que han impedido que vea satisfecho su posible derecho al reconocimiento y pago de su pensión de vejez, considera el despacho que es preciso recordar los últimos pronunciamientos de las Cortes a este respecto, para ello analizaremos en principio el contenido de la Sentencia T 014 de 2016 de la Corte Constitucional que establece:

"(…) En abundante jurisprudencia de este tribunal se ha señalado que por regla general la acción tuitiva es improcedente para garantizar el reconocimiento de derechos pensiónales, dado que es viable controvertir el contenido de estos a través de justicia laboral ordinaria o contencioso administrativa, según corresponda.

No obstante, esta Corte ha advertido que la tutela es procedente cuando se ejerce como mecanismo transitorio con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable o cuando el medio judicial preferente no resulte eficaz para obtener el amparo del derecho frente a la urgencia de una protección inmediata en el caso concreto, es decir de manera excepcional.

***Así las cosas, es deber del juez analizar los presupuestos fácticos del caso concreto, en aras de determinar si el instrumento de defensa judicial ordinario resulta eficaz para el amparo de las garantías fundamentales del accionante**, puesto que, ante la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, el conflicto planteado trasciende del nivel meramente legal al constitucional teniendo la acción de tutela la facultad de tomarse en el mecanismo principal de trámite del asunto, desplazando a la respectiva instancia ordinaria.*

*Justamente en este punto juega un papel de enorme importancia los presupuestos sentados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-063 de 2013 para determinar **i)** si los mecanismos ordinarios son eficaces para la protección de los derechos fundamentales involucrados en conflictos en que se pretenda el reconocimiento de acreencias pensionales y **ii)** si permiten evaluar la gravedad, inminencia e irreparabilidad del daño que podrá generarse si no se protegen por vía tutelar. Dichos presupuestos son:*

i) Que se trate de una persona de la tercera edad para ser considerado sujeto de especial de protección,

ii) Que la falta de pago de la prestación o su disminución genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular, del derecho al mínimo vital.

iii) Que se haya desplegado cierta actividad administrativa y Judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos y
iv) *Que acredite sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.*

De este modo, deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia del amparo."

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

El debido proceso es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, que se hace extensivo a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, pues con su aplicación se busca la protección de los

derechos que surjan en el trámite de una actuación respecto del accionante o peticionario, aplicando de esta manera, la justicia de una forma correcta y eficaz.

Ha reiterado en varias oportunidades la jurisprudencia, que quien asume el conocimiento o dirección de la actuación judicial o administrativa, es quien debe garantizar la protección respecto de este derecho fundamental, bajo el entendido que conoce el procedimiento establecido en la ley o en los reglamentos, aplicables a un caso concreto.

En tal sentido, *"el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado*"[1], de lo cual se infiere la defensa y salvaguarda de la justicia aplicable al territorio nacional, bajo los principios de i) jurisdicción; ii) Juez natural; iii) Derecho a la defensa; iv) Derecho a un proceso público; vi) Imparcialidad del juez.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

El derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 67 de nuestra Constitución Política, en los siguientes términos:

> ***"Artículo 67.*** *La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el* ***acceso al conocimiento****, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.*
>
> *La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.*
>
> *La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.*
>
> *Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley."*

De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia T 743 de 2013 menciona el alcance de este derecho en los siguientes términos:

> *El artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una doble condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa función social explica que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que haya comprometido a este último con tareas concretas que abarcan, desde la*

[1] Sentencia C 980 de 2010.

regulación y el ejercicio del control y vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación moral, física e intelectual de los estudiantes. En cuanto a servicio público, la educación exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable. En su dimensión de derecho, la educación tiene el carácter de fundamental, en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política.

De otro lado, la sentencia T 689 de 2016 da alcance al derecho a la educación superior:

7. El derecho a la educación superior[109]

*7.1. **La educación tiene cuatro dimensiones constitucionales**. Por una parte, es un derecho prestacional porque hace parte de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales –en adelante DESC– (arts. 67, 68 y 69 de la Constitución). Esto implica que su efectividad plena está ligada a la disponibilidad de recursos económicos, una regulación legal y una estructura organizacional[111]. Por otra parte, se constituye como derecho fundamental cuando se trata de educación primaria y básica[112] y, de manera excepcional, de educación superior, como se explicará más adelante.*

Así mismo, se trata de un servicio público regulado por la Ley 30 de 1992 (art. 365) y por el Decreto 1075 de 2015. Además, es un derecho-deber ya que implica obligaciones y derechos causados por la relación entre prestadores del servicio y usuarios, es decir, se refiere "concretamente a las obligaciones que se generan por parte de los planteles educativos –públicos o privados– con los estudiantes y la obligación que tienen éstos a cumplir con los deberes y obligaciones que se estipulan en el reglamento estudiantil".

7.2. El núcleo esencial del derecho a la educación abarca las siguientes dimensiones según la jurisprudencia constitucional: "(i) disponibilidad, que consiste en la existencia de los medios para que se satisfaga la demanda educativa de las personas, como por ejemplo escuelas, docentes calificados, materiales de enseñanza, entre otros; (ii) accesibilidad, que pone en cabeza del Estado el deber de garantizar en los niños el ingreso a la educación básica, de manera obligatoria y gratuita; (iii) permanencia en el sistema educativo, que protege el derecho a conservar la educación básica sin que existan criterios de exclusión irrazonables y finalmente, (iv) calidad, que consiste en brindarle a los estudiantes una educación que les permita adquirir y producir conocimientos suficientes para desarrollar sus planes de vida, sin importar el nivel socioeconómico.".

7.3. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución, la educación obligatoria "comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica". Lo anterior revela que es imperativo que el Estado brinde la educación de cinco años de primaria y cuatro de secundaria que comprende la educación básica. Sin embargo, no exime al Estado de la

responsabilidad de brindar la disponibilidad respecto de todas las etapas de la educación (preescolar, primaria, secundaria y superior).

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que, si bien la obligación del Estado en materia de educación se limita según el nivel de enseñanza, con base en el principio de progresividad le corresponde, junto con la familia y la sociedad, "el deber de procurar el acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad, mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se destaca, por expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior".

7.4. Por otro lado, múltiples instrumentos internacionales, que forman parte del bloque de constitucionalidad, soportan esta restricción en relación con la educación superior. La Convención sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Ley 12 de 1991, en su artículo 28 dispone:

> *"1. Los Estados Parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:*
> *[…]*
> *c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; …" (cursivas fuera del texto original).*

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 numeral 2º literal c), limita la obligatoriedad de la educación a la primaria, lo que deja por fuera al nivel preescolar y a los cuatro años de secundaria que están contemplados en la Carta del 1991:

"Artículo 13. 2. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: || […]
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; […]" (cursivas fuera del texto original).

Así mismo, con arreglo en el apartado c) del numeral 3º del artículo 13 del Protocolo de San Salvador:

> *"Artículo 13. 2. Los Estados parte en el presente Protocolo reconocen que, con [el] objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: […]*
> *c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; […]" (cursivas fuera del texto original).*

Por otra parte, aunque no hacen parte del bloque de constitucionalidad pero sí son criterios útiles de interpretación, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior (1998) y el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hacen un llamado a los Estados miembros para que adopten las medidas necesarias para fomentar la accesibilidad a la educación superior. Por ejemplo, "crear, cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero

para reformar y desarrollar la educación superior", e impulsar la vinculación con la investigación y los distintos sectores de la sociedad para que contribuyan eficazmente con el desarrollo. Visto lo anterior, no fija una obligación directa de brindar la educación superior.

Teniendo en cuenta que las disposiciones citadas expresan que el acceso y gratuidad de la enseñanza superior es un compromiso gradual de los Estados, estos deben tomar medidas para estimular su acceso y permanencia.

En cumplimiento de este deber, una de las funciones otorgadas al Ministerio de Educación consiste en formular políticas para el fomento de la educación superior. De igual forma, el ICETEX está encargado de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso a la educación superior "priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico", de manera que, por esta vía, el Estado colombiano tiende progresivamente a la provisión de mecanismos para que los asociados puedan realizarse personal y profesionalmente.

7.5. En concordancia con lo anterior, el derecho a la educación no solo goza de protección constitucional en su modalidad primaria, básica y secundaria. La Corte también ha protegido el derecho al acceso a la educación superior cuando su amenaza o vulneración provoca la amenaza o vulneración de otros derechos de carácter fundamental como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso por conexidad.

La Corte ha protegido el derecho a la educación por la correspondencia que esta tiene con el desarrollo personal e inclusive el plan de vida del individuo como herramienta para superar situaciones de marginación. Esta perspectiva presume que el grado de educación formal incide decisivamente en la calidad de vida de los individuos, las familias y las colectividades. En efecto, atiende a la relación entre la educación y la mejora de los niveles de ingreso, el acceso a oportunidades profesionales, la inserción en la vida productiva, la movilidad social, la salud de las personas, los cambios en la estructura de la familia, la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y responsable de las personas.

En este sentido, en la sentencia T-321 de 2007 expresó que "se puede concluir que el derecho a la educación goza de naturaleza fundamental, como quiera que su núcleo esencial comporta un factor de desarrollo personal y social, de manera que su ejercicio se dirige a la realización de la dignidad humana, en tanto permite la concreción de un plan de vida y el desarrollo pleno del individuo en sociedad".

Posteriormente, en la sentencia T-056 de 2011 la Sala Quinta de Revisión afirmó que el derecho fundamental a la educación: (i) es objeto de protección especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización personal, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre otros, y (iii) es uno de los fines esenciales del Estado social y democrático de derecho.

La vulneración del derecho a la educación y su conexidad con el debido proceso administrativo

7.6. En relación con el derecho a la educación y su conexidad con el debido proceso administrativo, se advierte que no existe un precedente idéntico proferido por esta Corporación para efectos de decidir los asuntos bajo

análisis. Sin embargo, hay algunos pronunciamientos a partir de los cuales se han construido reglas jurisprudenciales que pueden ser de utilidad en dicha tarea.

Por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2010 la Sala Novena de Revisión abordó un caso en el que uno de los problemas jurídicos que se debía resolver era si el rechazo de una solicitud de crédito presentada ante el ICETEX, originado en un requisito que no se encontraba publicado en el servicio de información virtual de la entidad al momento de elevarse la petición de crédito, desconocía el debido proceso de la accionante. La Sala consideró que el ICETEX había vulnerado el debido proceso de la actora al rechazar su crédito, con base en una exigencia desconocida por ella e impuesto unilateral y sorpresivamente por parte de la entidad accionada.

En consecuencia, dictó una orden de prevención en contra del ICETEX, con el fin de que no incurriera a futuro en este tipo de actuaciones incompatibles con el contenido normativo del principio de buena fe y lesivas del derecho fundamental al debido proceso.

Otro caso que sirve de referente para decidir el problema jurídico planteado en esta providencia es la sentencia T-375 de 2013. De acuerdo con los antecedentes fácticos, la alcaldía de un municipio se negó a entregar a un estudiante un incentivo educativo para cubrir gastos de matrícula y mantenimiento que le fueron reconocidos mediante decreto municipal del ente territorial, con el argumento de no haber sido expedido dicho acto administrativo que concedía el subsidio educativo bajo el mandato del "actual" gobierno local. Conforme a lo expuesto, la Sala Novena de Revisión encontró que al estudiante le habían adjudicado legalmente el beneficio, y que el mismo era producto de sus méritos académicos. Sostuvo en aquella oportunidad que el respeto al acto propio es una expresión del principio de buena fe que no puede soslayarse. Por lo tanto, argumentó que las decisiones que fueron adoptadas por la máxima autoridad administrativa del municipio, a través de un acto administrativo que creó una situación jurídica de carácter particular y concreto, no pueden ser desconocidas por la nueva cúpula de la administración con razones de carácter administrativo ajenas al ciudadano. Asimismo, que el actor no debía soportar la carga de ver suspendido un beneficio que adquirió en debida forma al amparo de unas reglas de juego previamente establecidas y cumplidas.

En el mismo orden de ideas se encuentra la sentencia T-079 de 2015 en la que se examinó si una entidad territorial que había creado becas para los mejores bachilleres vulneraba los derechos fundamentales a la educación, la igualdad y el debido proceso, de una joven de escasos recursos que pertenecía a una comunidad indígena, con su decisión de negarle el mencionado incentivo educativo. La razón que sustentó la entidad territorial para negar la beca fue que al verificar la base de datos del Sisben advirtió que el puntaje asignado a la menor no era suficiente. Sin embargo, pese a que la joven demostró que ese puntaje era erróneo y que no correspondía con su situación socioeconómica, para lo cual pidió una nueva encuesta que arrojó un puntaje que sí le permitía obtener el beneficio educativo, la entidad no accedió a modificar su decisión inicial. Al respecto, la Sala Sexta de Revisión sostuvo que la entidad territorial había vulnerado la garantía fundamental al debido proceso, pues "suprimió de toda posibilidad a la comunidad educativa de aportar o controvertir las pruebas que se consideraran necesarias en el desarrollo de la actuación administrativa y asumió con ello que la labor de verificación de sus propias bases de datos dotaba de veracidad la información obtenida". En consecuencia, amparó el

derecho fundamental a la educación de la joven, ordenando la entrega del incentivo educativo reclamado a través de la acción de tutela.

7.7. Los precedentes jurisprudenciales enunciados resaltan la forma como la negación y restricción de beneficios e incentivos educativos, a pesar de que en algunas oportunidades se sustente en la aplicación de normas reglamentarias, puede afectar el núcleo esencial de los derechos al debido proceso y a la educación, y como dicha vulneración puede acentuarse tratándose de población vulnerable, siendo necesaria la intervención del juez constitucional para garantizar su protección.

7.8. Así, se tiene que las entidades encargadas de reconocer subsidios o incentivos que cumplan una finalidad educativa, vulneran los derechos al debido proceso y la educación cuando: (i) rechazan el acceso a un incentivo educativo exigiendo requisitos fijados de forma unilateral y arbitraria, que no fueron conocidos previamente por quien aspira a ser favorecido con el mencionado beneficio; (ii) suspenden un auxilio económico para educación, adquirido en debida forma y que se venía recibiendo por cumplir estrictamente con requisitos establecidos con antelación; y (iii) suprimen la posibilidad de que los aspirantes al ser favorecidos con un subsidio económico para educación puedan aportar o controvertir pruebas para desvirtuar información desactualizada que conste en bases de datos consultadas por la entidad encargada de reconocer dicho subsidio, o para desvirtuar cualquier otra circunstancia que no se hubiese tenido en cuenta e igualmente restrinja el acceso al incentivo educativo.

Ahora bien, en lo que respecta específicamente al programa Generación E, la página web de la entidad accionada informa:



Descripción del fondo

Destinar recursos al reconocimiento de los mejores estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, por medio del componente de Excelencia del programa Generación E, que apoya el acceso y su permanencia en la educación superior a través de créditos condonables. La meta de la convocatoria es la adjudicación de mínimo 4.000 beneficiarios.

Y en cuanto a los requisitos para acceder al mismo contempla:

Requisitos

Requisitos del estudiante

Los estudiantes que serán elegibles para ingresar al programa de Excelencia deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Tener nacionalidad colombiana.
- Obtener el título de grado de bachiller en la vigencia 2018.
- Haber presentado las pruebas de Estado Saber 11° el 25 de febrero de 2018 o el 12 de agosto de 2018 y cumplir uno de los siguientes puntos:
  - Encontrarse dentro de los tres bachilleres con los mejores puntajes de la prueba saber 11° de cada departamento y de Bogotá.
  - Obtener un puntaje igual o superior a 357 en las pruebas Saber 11°.
- Estar registrado en la base nacional del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales- SISBÉN, suministrada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, con corte a 30 de agosto de 2018.

Requisitos del codeudor

Si es natural: No aplica

Si es jurídico: No aplica

Así mismo, el Reglamento Operativo del Programa de Acceso y Excelencia a la Educación Superior "Generación E" establece en su artículo 5:

> **Artículo 5. *Candidatos***. Serán candidatos para ingresar al componente de Excelencia los bachilleres que se encuentren registrados en la base nacional del SISBÉN con un puntaje específico, dentro del corte establecido por la convocatoria, o que se encuentran registrados en base censal del Ministerio del Interior para el caso de la población indígena, y que adicionalmente hayan presentado la prueba Saber 11° en el año 2018. Los candidatos serán seleccionados de la siguiente manera:
>
> - Los tres (3) mejores puntajes de la prueba saber 11° de cada Departamento y de Bogotá.
> - Los bachilleres que tengan 359 puntos o más en las pruebas Saber 11° a nivel nacional.
>
> **Parágrafo.** En el caso que el número de candidatos que tramiten la aceptación del beneficio para su adjudicación sea menor a 4.000, se generará una lista de espera y se disminuirá el puntaje exigido en la prueba Saber 11º, hasta completar los cupos disponibles, garantizando una participación mínima de tres beneficiarios por departamento. Los cupos disponibles para adjudicación se priorizarán entre los candidatos de la lista de espera con mayor puntaje en las pruebas Saber 11º y menor puntaje SISBÉN.
>
> **Artículo 6. *Beneficiarios*** Serán beneficiarios del componente de Excelencia, los candidatos que diligencien los formularios de "Interés en Participar" y "Formulario de Registro", y que realicen los trámites de legalización del crédito condonable, y cuenten con concepto jurídico viable por parte del ICETEX.

Así mismo, establece en su artículo 13:

> **Artículo 13. *Obligaciones del ICETEX.*** El ICETEX deberá:
>
> s) Publicar en la página web del ICETEX semestralmente el cronograma con las fechas de legalización y renovación de los créditos condonables e informar a las IES oportunamente estas fechas, conforme los calendarios aprobados por la Junta Administradora
> t) Publicar y divulgar las convocatorias y las condiciones del Fondo y por consiguiente del componente de Excelencia en la página Web del ICETEX, garantizando claridad y completitud de la información brindada.
> u) Brindar a los candidatos y beneficiarios del Componente Excelencia, la asesoría pertinente en aspectos básicos referentes al trámite y manejo del crédito, firma de garantías, así como de las condiciones para mantener el crédito educativo.

El caso en concreto.

Para el caso sub examine, toda vez que la pretensión de la accionante es que incluyan a su hijo en el programa "Generación E" para el periodo académico 2020-01 o en su defecto 2020-02, considera el despacho, que una vez revisada la documental allegada con el escrito de tutela, el menor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ MARÍN cumple los siguientes requisitos:

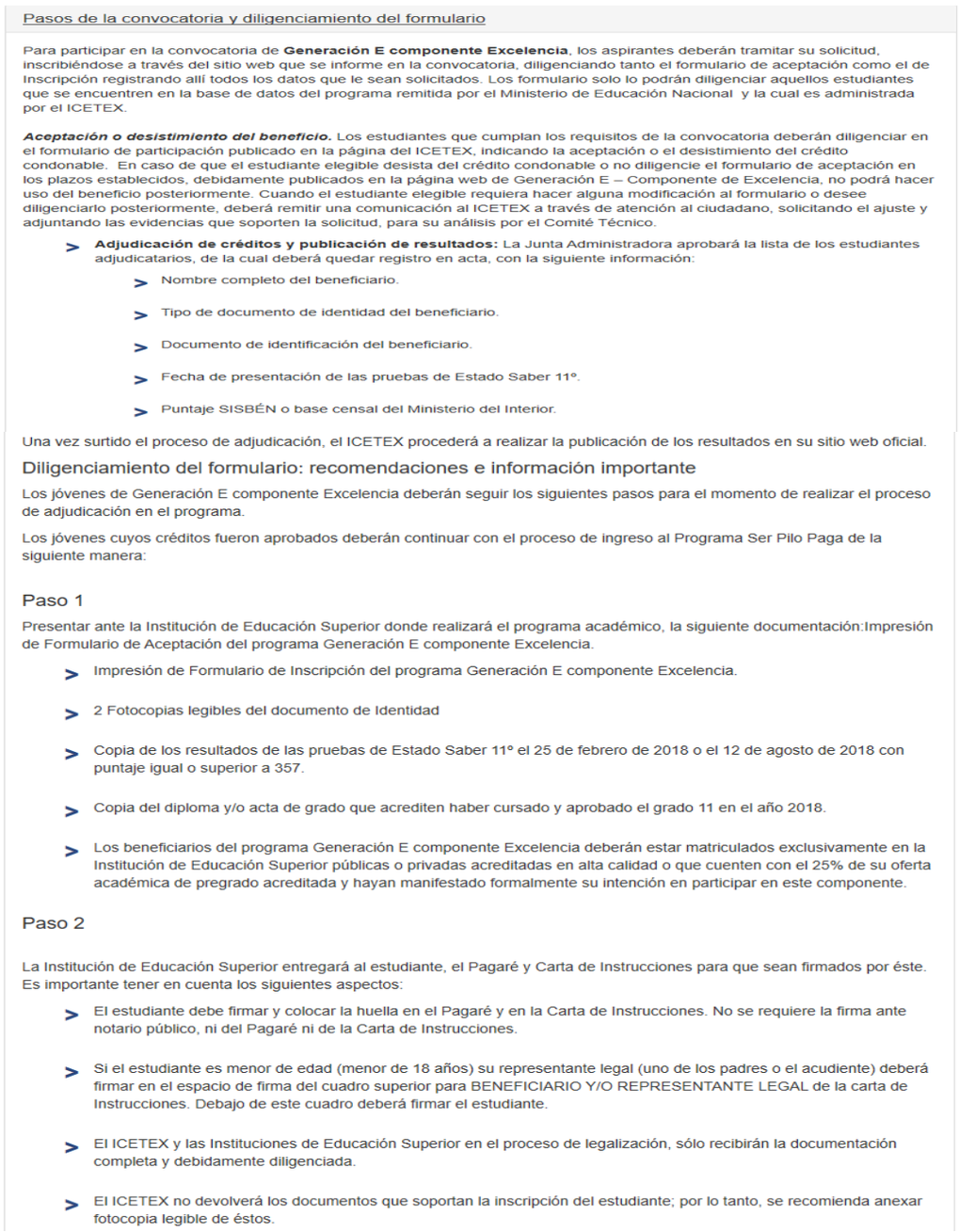
1. Ser nacional colombiano, lo cual se acredita con la copia de su tarjeta de identidad visible a folio 13 del expediente.

2. Haber obtenido el título de bachiller en 2018, lo cual se acredita con la copia de su diploma de grado visible a folio 14 del expediente.

3. Haber presentado las pruebas de Estado Saber 11º el 12 de agosto de 2018, como se observa a folio 15 del expediente, Y

4. Haber obtenido un puntaje igual o superior a 357 en las pruebas Saber 11°.

Ahora bien, pese a que de los demás documentos allegados por la accionante, no se evidencia la situación fáctica relatada, toda vez que no obra a folios prueba de las fechas en que el accionante intentó su inscripción o la legalización del crédito, ni de que los funcionarios de la entidad le hayan indicado los plazos que menciona, ya que los pantallazos visibles a folios datan del 29 de febrero y el 3 de marzo de 2020 y no son perfectamente legibles, con lo cual, el despacho no puede determinar si efectivamente el menor ANDRÉS FELIPE adelantó las gestiones mencionadas en los hechos de la presente acción dentro de los plazos establecidos por la entidad, lo cierto es que una vez revisada la página web de la misma, esta arroja la siguiente información:



Pasos de la convocatoria y diligenciamiento del formulario

Para participar en la convocatoria de **Generación E componente Excelencia**, los aspirantes deberán tramitar su solicitud, inscribiéndose a través del sitio web que se informe en la convocatoria, diligenciando tanto el formulario de aceptación como el de Inscripción registrando allí todos los datos que le sean solicitados. Los formulario solo lo podrán diligenciar aquellos estudiantes que se encuentren en la base de datos del programa remitida por el Ministerio de Educación Nacional y la cual es administrada por el ICETEX.

Aceptación o desistimiento del beneficio. Los estudiantes que cumplan los requisitos de la convocatoria deberán diligenciar en el formulario de participación publicado en la página del ICETEX, indicando la aceptación o el desistimiento del crédito condonable. En caso de que el estudiante elegible desista del crédito condonable o no diligencie el formulario de aceptación en los plazos establecidos, debidamente publicados en la página web de Generación E – Componente de Excelencia, no podrá hacer uso del beneficio posteriormente. Cuando el estudiante elegible requiera hacer alguna modificación al formulario o desee diligenciarlo posteriormente, deberá remitir una comunicación al ICETEX a través de atención al ciudadano, solicitando el ajuste y adjuntando las evidencias que soporten la solicitud, para su análisis por el Comité Técnico.

- **Adjudicación de créditos y publicación de resultados:** La Junta Administradora aprobará la lista de los estudiantes adjudicatarios, de la cual deberá quedar registro en acta, con la siguiente información:
  - Nombre completo del beneficiario.
  - Tipo de documento de identidad del beneficiario.
  - Documento de identificación del beneficiario.
  - Fecha de presentación de las pruebas de Estado Saber 11º.
  - Puntaje SISBÉN o base censal del Ministerio del Interior.

Una vez surtido el proceso de adjudicación, el ICETEX procederá a realizar la publicación de los resultados en su sitio web oficial.

Diligenciamiento del formulario: recomendaciones e información importante

Los jóvenes de Generación E componente Excelencia deberán seguir los siguientes pasos para el momento de realizar el proceso de adjudicación en el programa.

Los jóvenes cuyos créditos fueron aprobados deberán continuar con el proceso de ingreso al Programa Ser Pilo Paga de la siguiente manera:

Paso 1

Presentar ante la Institución de Educación Superior donde realizará el programa académico, la siguiente documentación:Impresión de Formulario de Aceptación del programa Generación E componente Excelencia.

- Impresión de Formulario de Inscripción del programa Generación E componente Excelencia.
- 2 Fotocopias legibles del documento de Identidad
- Copia de los resultados de las pruebas de Estado Saber 11º el 25 de febrero de 2018 o el 12 de agosto de 2018 con puntaje igual o superior a 357.
- Copia del diploma y/o acta de grado que acrediten haber cursado y aprobado el grado 11 en el año 2018.
- Los beneficiarios del programa Generación E componente Excelencia deberán estar matriculados exclusivamente en la Institución de Educación Superior públicas o privadas acreditadas en alta calidad o que cuenten con el 25% de su oferta académica de pregrado acreditada y hayan manifestado formalmente su intención en participar en este componente.

Paso 2

La Institución de Educación Superior entregará al estudiante, el Pagaré y Carta de Instrucciones para que sean firmados por éste. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El estudiante debe firmar y colocar la huella en el Pagaré y en la Carta de Instrucciones. No se requiere la firma ante notario público, ni del Pagaré ni de la Carta de Instrucciones.
- Si el estudiante es menor de edad (menor de 18 años) su representante legal (uno de los padres o el acudiente) deberá firmar en el espacio de firma del cuadro superior para BENEFICIARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL de la carta de Instrucciones. Debajo de este cuadro deberá firmar el estudiante.
- El ICETEX y las Instituciones de Educación Superior en el proceso de legalización, sólo recibirán la documentación completa y debidamente diligenciada.
- El ICETEX no devolverá los documentos que soportan la inscripción del estudiante; por lo tanto, se recomienda anexar fotocopia legible de éstos.

Yg

- Una vez el crédito ha sido legalizado DE NINGUNA MANERA se puede desistir de éste sin previa autorización de la Institución de Educación Superior.

Paso 3

- Una vez la Institución de Educación Superior revisa y valida que toda la documentación está en orden y acorde con lo establecido en la reglamentación, procede a enviarla al Operador del ICETEX que realiza la revisión jurídica de garantías y documentos.

2. Proceso de legalización

El **proceso de legalización es el cargue de documentos** únicamente de los estudiantes que fueron aprobados en la convocatoria.

Pasos del proceso de legalización

- Reunir toda la documentación solicitada incluidas las garantías.
- Entregar la documentación en las Instituciones de Educación Superior dentro de los plazos establecidos.
- Después de 15 días hábiles, consultar ante la IES o lugar donde legalizó el crédito el concepto de viabilidad de las garantías y los documentos.
- Los beneficiarios que se encuentran en una zona apartada o ciudad diferente a la de la Institución de Educación Superior en donde realizará sus estudios, podrán solicitar el envío de las garantías (pagaré y carta de instrucciones) como archivo en formato PDF por medio de correo electrónico, para su diligenciamiento y posterior envío a la institución por correo certificado de las garantías y los documentos establecidos.

Documentos requeridos en el proceso de legalización y parámetros de entrega

Lugar de entrega de los documentos

La entrega de los documentos será entregada unicamente en cada una de las Universidades deEducación Superior.

Plazo de entrega de los documentos
El calendario de legalización para los jóvenes de Generación E componente Excelencia esta del día 18 de junio al 15 de octubre de 2019.

Documentos requeridos

Documentos generales

- Formulario de solicitud del crédito de Generación E componente Excelencia descargado de la plataforma del cual diligencio el formulario este tiene que ir firmado por el estudiante y su representante legal en caso de ser menor de edad.
- Pagaré y carta de instrucciones debidamente firmada y con huella dactilar del estudiante y su representante legal en caso de ser menor de edad.
- 2 Fotocopias del documento de identidad.
- Copia de los resultados de la prueba SABER 11, que conste el puntaje requerido en la respectiva convocatoria.
- Copia del diploma y/o acta de grado que acrediten haber cursado y aprobado el grado 11 en el tiempo requerido para la convocatoria

Sobre las garantías

El crédito se respalda con los siguientes documentos, para que en la eventualidad de ejercer cobro por incumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios del fondo para condonación, se pueda proceder a solicitar el reintegro de los valores girados; estas garantías las puede reclamar en su Universidad o en el ICETEX, presentación previa de los documentos anteriores.

Pagaré con espacios en blanco: La suscripción del pagaré implica la firma del mismo por parte del beneficiario y la impresión de las huellas dactilares. No requiere reconocimiento de firma ante Notario Público.

Carta de Instrucciones: En la cual el beneficiario expresa conocer y aceptar las obligaciones adquiridas con el ICETEX, y lo autorizan para llenar los espacios en blanco del pagaré que se suscriba a favor del ICETEX. No requiere reconocimiento de firma ante Notario Público.

Si el beneficiario es menor de edad (menor de 18 años) su representante legal (uno de los padres o el acudiente) deberá firmar en el espacio de firma del cuadro superior para BENEFICIARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL, de la carta de Instrucciones. Debajo de este cuadro deberá firmar el beneficiario.

Parámetros de la entrega

- Los documentos se deben entregar legajados con gancho plástico en una carpeta tamaño oficio de marbete vertical marcados por apellidos y nombre.
- Las garantías no se deben legajar.
- Solo se reciben la documentación completa y debidamente diligenciada. ·Deben ser totalmente legibles, sin enmendaduras, tachaduras, anotaciones o subrayados.
- La entrega es de forma presencial y personal.
- No se aceptan ni se tramitan documentos por correo electrónico o correspondencia.
- No se tendrá en cuenta la documentación presentada fuera de los plazos establecidos.

Calendario de legalización

Periodo 2019-2		
Actividad	Concepto	Fechas a ejecutar
1	Formulario de aceptación	30 de abril al 20 de septiembre de 2019
2	Formulario de registro	22 de mayo al 30 de septiembre de 2019
3	Legalización	18 de junio al 15 de octubre de 2019

De lo anterior se concluye que no existe información en la página web de la entidad referente a la imposibilidad de postularse simultáneamente a dos o más fondos educativos de los que administra la entidad, ni que para postularse a uno de ellos esté prohibido haberse postulado a otro.

Así las cosas, y teniendo en cuenta el fallo de tutela allegado, observa el despacho que efectivamente el menor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ MARÍN se encontraba inscrito en el fondo para víctimas del conflicto armado, y que, con ocasión de ello, le fue ordenado a la accionada ICETEX convocar nuevamente a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO a fin de que se realizara en debida forma la valoración de los criterios de calificación correspondientes al menor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ MARÍN y al rector de la Universidad Externado de Colombia, reservar el cupo que le fue otorgado hasta que el ICETEX publicara los resultados de la calificación anterior.

En consecuencia, se considera que la accionada faltó a las obligaciones contenidas en los literales “s”, “t” y “u” del artículo 13 del Reglamento Operativo del Programa de Acceso y Excelencia a la Educación Superior “Generación E” por cuanto no le informó al menor ANDRÉS FELIPE que para acceder al Programa Generación E no podía encontrarse inscrito en ningún otro programa o fondo y tal situación le generó un retraso significativo en su proceso de inscripción y aceptación del crédito y verse supeditado a elevar una petición para desistir de su inscripción al fondo para víctimas del conflicto armado, cuya respuesta por parte de la entidad se daría con posterioridad a las fechas establecidas para culminar el proceso, por consiguiente, se encuentran vulnerados los derechos al debido proceso y a la educación del menor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ MARÍN, al haberse omitido informar las consecuencias negativas de una doble inscripción, pese a cumplir con los requisitos establecidos para acceder al programa de Generación E.

Así las cosas, se resolverá en tal sentido, no obstante, teniendo en cuenta que el país se encuentra actualmente en Estado de Emergencia con ocasión de la propagación del COVID 19, y que, a consecuencia de ello, las instituciones educativas han adelantado las vacaciones o pospuesto el calendario académico, se ordenará a la accionada, formalizar la inscripción del accionante y facilitar la culminación de su proceso para acceder al crédito condonable dentro del Programa Generación E para el periodo 2020-2.

DECISIÓN

En razón y mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C**., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y mandato de la Constitución,

RESUELVE:

<u>PRIMERO:</u> TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y a la EDUCACIÖN del menor **ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ MARÍN** identificado con T.I. 1006408823 y en tal sentido:

<u>SEGUNDO:</u> ORDENAR al **INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX**, formalizar la inscripción del accionante y facilitar la culminación del proceso acceso al crédito condonable dentro del Programa Generación E en el periodo 2020-2; para lo cual se concede el término de **CUARENTA Y OCHO (48) HORAS** contadas a partir de la notificación de la presente providencia y una vez culmine la crisis para superar la contención del denominado COVID19.

<u>TERCERO:</u> NOTIFICAR a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

<u>CUARTO:</u> REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento de no ser impugnado el fallo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Original Firmado

JULIO ALBERTO JARAMILLO ZABALA
JUEZ

Yg